La semana pasada tuvo lugar en Zaragoza el foro sobre “El desafío de los grandes incendios forestales. Impactos en el territorio”, organizado por el Gobierno de Aragón y la Fundación Felipe González, donde pudimos escuchar las diversas ponencias y opiniones que realizaron desde responsables de extinción, profesores de universidad, empresarios y políticos.

Por la parte técnica del Gobierno de Aragón, solo pudimos escuchar al jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil, pero en cambio no escuchamos la opinión de ningún responsable del servicio de Gestión de los Incendios Forestales, ni tampoco a ningún responsable técnico del Servicio de Planificación y Gestión Forestal.

Si escuchamos por parte de algunos políticos del Gobierno de Aragón, que la actual inversión en extinción no es eficaz, y que prueba de ello es que, a pesar de haber triplicado el presupuesto en prevención y extinción de incendios forestales en Aragón, hemos sufrido una de las peores campañas de incendios y el operativo solo ha podido duplicar las hectáreas gestionadas en prevención.

Desde el Comité Intercentros de SARGA, que representa a todos los trabajadores de prevención y extinción de incendios forestales de la empresa pública, consideramos que es un argumento sesgado y manipulado con el único fin de poder justificar ante la opinión publica una voluntad de no querer seguir destinando recursos al operativo de incendios de SARGA.

Esto es hacer oídos sordos a lo que se planteó en el foro y es que por cada euro que se invierte en extinción es necesario invertir tres en gestión forestal para volver a estar en una situación de equilibrio y capacidad de extinción, frente a la acumulación de biomasa de nuestros montes.

Y esta gestión forestal no es responsabilidad del operativo de prevención y extinción de incendios forestales, ni tampoco es necesario hacer prevención en los 2,5 millones de hectáreas.

¿Alguien se imagina un servicio de salud solo basado en las urgencias?

Hay que recordar que la función del operativo es dar una respuesta a las emergencias por incendio forestal.

También hay que señalar que la mayor parte de la titularidad de esas 2’5 millones de ha, son privadas, y que el estado actual de abandono, es por una falta de rentabilidad económica de los aprovechamientos forestales.

Ante esta situación de falta de políticas y de falta de voluntad de inversión, no pensamos que la solución pase por desviar fondos del operativo de la empresa pública SARGA, a empresas privadas, pues ha esto se le conoce como desvestir un santo para vestir a otro y no da una respuesta a la solución del problema de la gestión forestal.

Solo la puesta en valor de los aprovechamientos forestales, de que los propietarios forestales reciban una compensación económica por los servicios ecosistémicos y de un reparto justo de las rentas y oportunidades entre las zonas urbanas y las rurales, podrá permitir gestionar gran parte de nuestras masas forestales y a la vez ofrecer una rentabilidad económica para atraer la inversión del sector privado, según resaltaron algunos de los ponentes.

En este foro y según las palabras del jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil, se dijo que es necesario tener una planificación frente al riesgo de incendio forestal y ejecutarla para poder hacer frente a la emergencia y así poder mitigar los daños.

Según se establece en la ley de Montes todas las zonas de Alto Riesgo deben de contar con sus planes de defensa, y en este documento técnico vienen reflejadas las actuaciones e infraestructuras necesarias para la defensa de estos territorios. A fecha de hoy no hay ningún Plan de defensa aprobado, por lo que actualmente los trabajos del operativo no pueden ser del todo eficaces, al no existir una planificación clara en materia de prevención.

No se puede hacer frente a los incendios forestales cuando la parte de la planificación y prevención de la emergencia no está planificada, ni ejecutada.

Por todo ello exigimos el inicio de la negociación con la empresa y la Consejería para que los recursos comprometidos en el actual presupuesto puedan erradicar la precariedad del colectivo y se establezca definitivamente una voluntad política por mejorar la profesionalización y modernización del servicio de bomberos forestales, donde la prevención siga una planificación técnica con el fin de garantizar la seguridad y éxito de las operaciones de extinción, y poder dar una respuesta segura ante las emergencias por incendio forestal y otras emergencias en el medio rural y natural, y para ello es necesario garantizar unos recursos económicos suficientes y sostenidos.